



MINISTERIO
DE POLÍTICA TERRITORIAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA GENERAL
DE FUNCIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL
DE GOBERNANZA PÚBLICA

Expediente: 001-043070

Nombre: [REDACTED]

NIF: [REDACTED]

Correo electrónico: [REDACTED]

Con fecha 13 de mayo de 2020 tuvo entrada en la Unidad de Información de Transparencia del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital la solicitud de acceso a la información pública al amparo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, presentada por la persona indicada en el encabezado de esta resolución, solicitud que quedó registrada con el número 001-043070:

“Asunto: Apoderamientos Apud Acta Ayuntamiento de Arriate

Información que solicita: Buenas tardes, soy [REDACTED], administrativa del Ayuntamiento de Arriate. Tengo una duda sobre el Registro de Apoderamientos Electrónico y como no sabía cómo ponerme en contacto con vosotros, lo hago por este medio. Nos ha surgido el siguiente problema: un arquitecto presenta a través de la sede electrónica del Ayuntamiento una solicitud de licencia de obras actuando en nombre y representación de un cliente extranjero que quiere hacerse una casa en el pueblo. No puede hacer una apoderamiento Apud Acta a través de la Sede ya que su cliente no dispone de Certificado digital válido en España, y tampoco le da la opción la plataforma de registrar el mandato que firmaron en papel antes de irse. El cliente no puede viajar a España. ¿Cómo se podría registrar o acreditar esa representación? Gracias. Un saludo”.

En aplicación de la disposición adicional tercera del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, se suspendieron los plazos para la tramitación del procedimiento.

secretaria.dggp@correo.gob.es

MANUEL CORTINA 2
28071 MADRID
TEL 91 273 32 46/47

CSV : [REDACTED]

DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servicios/consultaCSV.htm>

FIRMANTE(1) : [REDACTED] | FECHA : 01/06/2020 09:05 | Sin acción específica



El día 1 de junio de 2020 se reanudan los plazos administrativos, de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo, por el que se prorroga el estado de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Analizada la solicitud, esta Dirección General de Gobernanza Pública resuelve conceder el acceso a la información en los siguientes términos:

La Orden HAP/1637/2012, de 5 de julio, por la que se regula el Registro Electrónico de Apoderamientos (REA), en su artículo 3, determina que en el caso de poderdante persona física la inscripción de apoderamientos se realizará por alguno de estos medios:

- a) Por internet por el poderdante mediante el uso de los sistemas de identificación y autenticación previstos en el artículo 13.2.a) y b) de la Ley 11/2007, de 22 de junio.
- b) Mediante comparecencia personal del poderdante en las oficinas de atención al ciudadano.
- c) Mediante poder otorgado mediante documento público o privado con firma notarialmente legitimada, presentado en una oficina adherida al Registro.

En respuesta a su consulta, y dado que se comunica que el poderdante no puede utilizar el procedimiento a) por no disponer de los medios electrónicos y tampoco comparecer en una oficina por encontrarse fuera de España, el procedimiento a seguir sería por comparecencia del apoderado (en este caso el arquitecto) en una oficina de atención al ciudadano, que preste servicio de registro de apoderamientos, para presentar la solicitud de registro de apoderamiento (modelo I de la Orden HFP/633/2017) y un documento público o privado con firma notarialmente legitimada que permita cotejar esta información por los servicios jurídicos y se proceda a la inscripción del apoderamiento en el REA.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa), en el plazo de



dos meses o, previa y potestativamente, reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno en el plazo de un mes.

La Directora General de Gobernanza Pública

[REDACTED]